



Bogotá, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

**CLASE DE PROCESO:** ACCIÓN DE TUTELA- INCIDENTE DE DESACATO  
**ACCIONANTE:** JAVIER ANDRÉS CHINGUAL GARCÍA.  
**ACCIONADO:** SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO –  
REGISTRADURÍA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ – ZONA  
SUR - REGISTRADURÍA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SOACHA-  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.  
**RADICACION:** 11001-33-35-010-2022-00011-00

Procede el despacho a tomar la determinación que corresponda dentro del trámite incidental de desacato, promovido por el señor JAVIER ANDRÉS CHINGUAL GARCÍA, así como el informe de cumplimiento de fallo de tutela presentado por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Soacha- Cundinamarca, conforme a las manifestaciones hasta ahora vertidas en la actuación por las partes.

#### I. SITUACIÓN FÁCTICA

Mediante fallo de tutela, este juzgado el 26 de enero de 2022, amparó el derecho fundamental de petición del accionante, emitiendo orden en los siguientes términos:

*“PRIMERO: Declarar que existe CARENCIA DE OBJETO por hecho superado, en la acción de tutela instaurada por JAVIER ANDRÉS CHINGUAL GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 87.715.537, con respecto a la solicitud elevada el 1º de octubre de 2021 ante el REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ –ZONA SUR, de conformidad con la parte considerativa de la presente providencia.*

*SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición de JAVIER ANDRÉS CHINGUAL GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 87.715.537, frente a la solicitud presentada el 1º de octubre de 2021 ante el REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SOACHA.*

*TERCERO: En consecuencia, se ORDENA al REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SOACHA, o quien haga sus veces, que dentro del término improrrogable de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a resolver de manera clara y congruente con lo solicitado, la petición elevada por la parte actora el 1º de octubre de 2021, efectuando la respectiva notificación de la respuesta, bajo los parámetros establecidos por la Ley para tal fin.  
(...)”*

A su vez, el Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección Segunda –Subsección “D, mediante fallo de 23 de junio de 2022, efectuó modificación al fallo de tutela de primera instancia, en los siguientes términos:

*“PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutive del fallo impugnado, el cual quedará así:*

*“SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición y debido proceso del señor Javier Andrés Chingual García, identificado con C.C. No. 87.715.537, frente a la solicitud presentada el 1º de octubre de 2021 ante el Registrador de Instrumentos Públicos de Soacha.”*

*TERCERO: DEJAR INCÓLUME en lo demás la sentencia impugnada”.*

De otra parte, se tiene que el Registrador de Instrumentos Públicos de Soacha-



Cundinamarca, ha emitido comunicaciones dirigidas al accionante, las que también ha remitido a este trámite de tutela, propendiendo con ello acreditar el cumplimiento de la orden judicial que amparó el derecho fundamental de petición del accionante.

Al respecto, este Juzgado mediante auto de 5 de julio de 2022, requirió al registrador destinatario de la orden de tutela para impartir el trámite legal correspondiente a los puntos 3, 4 y 5 del derecho de petición objeto de amparo constitucional, frente a los que consideró este Despacho en auto de 5 de julio, lo siguiente:

*“(…) I) hasta el momento no se logra determinar que el accionante, haya obtenido una respuesta de fondo a los puntos 3, 4 y 5 de la petición, o en su defecto la remisión al funcionario que estima la Oficina accionada, es competente para dar respuesta a tales solicitudes, deber legal de remisión que le asiste a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Soacha, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del C.P.A.C.A.; Y II) el sentido de la pregunta de la petición en su punto 5, da cuenta de que se le está indagando a la ORIP Soacha si la misma ordenó o no la cancelación del folio de matrícula de un predio a su homólogo en Bogotá- Zona Sur, petición frente a la cual no hay respuesta sobre si sí o no, la Oficina de Soacha elevó alguna solicitud en tal sentido a la ORIP Bogotá Zona Sur.*

*En virtud de lo que el Despacho constata, se requerirá a la accionada que proceda a impartir el trámite que legalmente corresponde, a los puntos 3, 4 y 5 de la solicitud, emitiendo respuesta de fondo al punto 5 de la solicitud, y remitiendo en lo restante el punto 5 así como los puntos 3 y 4, del derecho de petición objeto de amparo”*

A lo anterior, el funcionario GUILLERMO TRIANA SERPA, Registrador Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha- Cundinamarca, allegó manifestación al presente trámite, esbozando argumentos de defensa y aportó los documentos anexos con los que pretende sustentar que el accionante ya ha recibido respuestas de fondo al derecho de petición amparado, y solicita se archive la solicitud de incidente de desacato.

Mediante auto de 12 de julio de 2022, el Juzgado puso en conocimiento del accionante la manifestación anterior y sus anexos (archivo 049), frente a lo que la parte actora guardó silencio.

## II. Para resolver se **CONSIDERA:**

### a) Naturaleza y fines del incidente de desacato

Inicialmente, debe hacerse alusión al instituto del incidente de desacato y su desarrollo jurisprudencial. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU 034 de 2018, con ponencia del Mg. ALBERTO ROJAS RIOS ha manifestado:

*“En síntesis: el incidente de desacato es un instrumento procesal para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados mediante la acción de tutela, que tiene lugar cuando el obligado a cumplir una orden de tutela no lo hace. En este trámite incidental, el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, puede sancionar con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes judiciales encaminadas a restaurar el derecho vulnerado, lo cual debe efectuarse con plena observancia del debido proceso de los intervinientes y dentro de los márgenes trazados por la decisión de amparo”.*

De esta manera, el incidente de desacato surge como un instrumento procesal por el cual se da plena garantía al derecho constitucional de acceso a la administración de justicia del accionante (art. 229 C.P.), en tanto se orienta a la materialización de la decisión judicial dictada en sede de tutela, pues no es suficiente el que las personas logren la protección de sus derechos fundamentales por vía de la acción de tutela, sino que además se le debe proveer de los mecanismos que hagan efectiva la orden



proferida por el juez de tutela.

Ahora bien, la jurisprudencia en la materia es muy precisa en señalar que el poder con el que cuenta el Juez que revisa el incidente de desacato es de carácter disciplinario<sup>1</sup> y deberá, ante todo, verificar el presunto incumplimiento sin que le sea permitido modificar el contenido del fallo de tutela del que se solicita el cumplimiento, pues respecto de dicho fallo ha operado el principio de cosa juzgada; sin embargo, dicha prohibición versa solo sobre la sustancia, es decir, sobre la decisión de amparar el derecho fundamental, no sobre la forma como se va a procurar el amparo.

Ya frente al derecho de petición, el desarrollo jurisprudencial nacional y su posición han sido pacíficas. La respuesta debe ser congruente, de fondo, clara y debidamente notificada al interesado **sin que ello implique per se que deba accederse a su solicitud**. Al respecto, la Corte Constitucional ha advertido «que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva».<sup>2</sup>

#### **b) Carencia de objeto e incidente de desacato**

Como se ve, el objeto de perseguir mediante el trámite incidental, el cumplimiento de un fallo de tutela es lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales amparados por la decisión judicial. En este orden de ideas, una orden emanada tanto en el fallo de tutela como en el incidente de desacato que persiga su cumplimiento, caería en el vacío en el evento de haber cesado la afectación al derecho fundamental objeto de amparo o no haber lugar ya a dicha protección.

En este punto se destaca que jurisprudencialmente se ha venido desarrollando la figura denominada “carencia de objeto”, que da cuenta de la ineficacia de emitir orden judicial alguna en sede de tutela cuando devendría en inocua frente al amparo de derechos fundamentales.

La Corte Constitucional, en sentencia SU-522 de 2019, efectuó un recuento del desarrollo que ha tenido la figura de la **carencia de objeto** de la cual inicialmente se establecieron la categoría de hecho superado y la de daño consumado, reconociéndose posteriormente una tercera posibilidad por la cual se puede configurar este fenómeno, relacionada con las situaciones sobrevinientes. En el pronunciamiento en mención, la Corte sostuvo lo siguiente:

*“39. La tutela fue diseñada por la Constitución de 1991 como un procedimiento preferente y sumario al alcance de todas las personas, con el fin de brindar “protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”<sup>3</sup>. En ocasiones, sin embargo, la **alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda su razón de ser**<sup>4</sup> como mecanismo extraordinario de protección judicial<sup>5</sup>. La doctrina constitucional ha agrupado estos casos bajo la categoría de “carencia actual de objeto”; y si bien el concepto central se ha mantenido uniforme, con el devenir de la jurisprudencia se ha venido ajustando su clasificación y las actuaciones que se desprenden para el juez de tutela ante estos escenarios.*

*40. Desde su primer año de funcionamiento, la Corte ha venido explicando que la acción*

<sup>1</sup> COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T527 de 2012.

<sup>2</sup> COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 206 de 28 de mayo de 2018. Expediente T 6.187.295. Mg. Ponente. Dr. Alejandro Linares Cantillo. Citando a su vez a COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL a la Sentencia T 376 de 2017.

<sup>3</sup> Constitución Política, Artículo 86.

<sup>4</sup> Sentencia SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.

<sup>5</sup> Sentencia T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. Ver también SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.



de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual justifica la necesidad de una decisión, positiva o negativa, por parte del juez. Pero, si luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma, no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”<sup>6</sup>. Esta es la idea central que soporta el concepto de carencia actual de objeto. En otras palabras, el juez de tutela no ha sido concebido como un órgano consultivo<sup>7</sup> que emite conceptos o decisiones inocuas<sup>8</sup> una vez ha dejado de existir el objeto jurídico<sup>9</sup>, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados. Ello no obsta para que, en casos particulares, la Corte Constitucional aproveche un escenario ya resuelto para, más allá del caso concreto, avanzar en la comprensión de un derecho -como intérprete autorizado de la Constitución Política<sup>10</sup>- o para tomar medidas frente a protuberantes violaciones de los derechos fundamentales<sup>11</sup>.

### 3.1. Categorías de la carencia actual de objeto

41. Inicialmente, la jurisprudencia solo contempló dos categorías en las que podían subsumirse los casos de carencia actual de objeto: hecho superado y daño consumado. Aunque la distinción no siempre fue clara<sup>12</sup>, el **hecho superado** responde al sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela<sup>13</sup>, como producto del obrar de la entidad accionada. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna<sup>14</sup>. (...)

42. El **daño consumado**, por su parte, tiene lugar cuando se ha perfeccionado la

<sup>6</sup> Sentencia T-519 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; Ver también, sentencias T-535 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-570 de 1992. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein; T-033 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández.

<sup>7</sup> Sentencia C-113 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía: “Ni en las once funciones descritas en el artículo 241, ni en ninguna otra norma constitucional, se asigna a la Corte Constitucional la facultad de servir de órgano consultivo a los jueces. Y tampoco hay norma constitucional que les permita a éstos elevar tales consultas”. Auto 026 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett: “De conformidad con el artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional no tiene competencia para resolver consultas que formulen los ciudadanos, ya que su función es jurisdiccional y no consultiva”. Ver también Auto 276 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

<sup>8</sup> “La tutela es una garantía constitucional destinada a la protección de los derechos fundamentales, y por lo mismo, cuando cesa la amenaza o la violación de los derechos fundamentales del solicitante, bien porque la causa de la amenaza desapareció o fue superada, o porque la violación cesó o el derecho fue satisfecho, entonces la acción de tutela pierde su razón de ser, en la medida en que cualquier decisión que el juez pueda adoptar, carecerá de fundamento fáctico. De este modo, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir cualquier orden de protección del derecho invocado, en tanto que la decisión judicial resulta inocua.” Sentencia SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. Ver también Sentencia SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.

<sup>9</sup> “En varias ocasiones ha dicho la Corte Constitucional que en aquellas contingencias en las cuales los supuestos de hecho que daban lugar a la eventual amenaza de violación o violación de derechos constitucionales fundamentales han cesado, desaparecen o se superan, deja de existir objeto jurídico respecto del cual la o el juez constitucional pueda adoptar decisión alguna por cuanto el propósito de la acción de tutela consiste justamente en garantizar la protección cierta y efectiva del derecho y bajo esas circunstancias “la orden que profiera el [o la] juez, cuyo objetivo constitucional era la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente vulnerado o amenazado, carecerá de sentido, eficacia, inmediatez y justificación”. Sentencia T-988 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Cita original con pies de página.

<sup>10</sup> Constitución Política, Artículo 241. Ver Sentencia T-198 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez: “La Corte en sede de revisión tiene el deber constitucional de dictar jurisprudencia, es el espacio en el cual cumple la función de fijar la interpretación de los derechos fundamentales como autoridad suprema de la jurisdicción constitucional”.

<sup>11</sup> Sentencias SU-540 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-495 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-236 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.

<sup>12</sup> “Cabe recordar que la carencia actual de objeto se ha fundamentado en la existencia de un daño consumado, en un hecho superado, en la asimilación de ambas expresiones como sinónimas, en la mezcla de ellas como un hecho consumado y hasta en una sustracción de materia, aunque también se ha acogido esta última expresión como sinónimo de la carencia de objeto”. Sentencia SU-540 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Cita original con pies de página.

<sup>13</sup> Sentencia SU-540 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

<sup>14</sup> Sentencia T-533 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto.





*afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación<sup>15</sup>. De ahí que el daño consumado tenga un efecto simbólico más reprochable que el hecho superado, en la medida en que en el primer caso la accionada “lleva la situación a un límite extremo en que el restablecimiento del derecho es imposible”<sup>16</sup>. (...)*

*(...)*

*(....)*

**45. El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena<sup>17</sup> como por las distintas Salas de Revisión<sup>18</sup>. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cubre casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”<sup>19</sup>. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora<sup>20</sup>; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental<sup>21</sup>; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada<sup>22</sup>; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la litis<sup>23</sup>.**

*(...)” (Negrillas y subrayado del Juzgado)*

En esos términos, la figura de la “carencia de objeto” fue desarrollada inicialmente en virtud de dos categorías como son el hecho superado y el daño consumado. Sin embargo, se ha reconocido que eventualmente pueden existir otras situaciones ajenas a las partes que hagan cesar de manera definitiva la afectación de un derecho, lo cual conllevaría a que una orden judicial termine resultando inane, para amparar derechos fundamentales antes amenazados o vulnerados. A esta forma de carencia de objeto, se le ha reconocido que se da en virtud de *hecho o hechos sobrevinientes*.

<sup>15</sup> Sentencia T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.

<sup>16</sup> Sentencia T-213 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

<sup>17</sup> Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.

<sup>18</sup> Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

<sup>19</sup> Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.

<sup>20</sup> Por ejemplo, cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en el suministro del medicamento que solicitó vía tutela, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios. Sentencia T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. Son también los casos en los que las accionantes, ante las trabas y demoras injustificadas, deciden practicarse la interrupción voluntaria al embarazo, en establecimientos particulares (Ver T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto y T-988 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)

<sup>21</sup> En Sentencia T-025 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos, un inmigrante venezolano, portador de VIH, solicitó a la Secretaría de Salud de Santa Marta entrega de unos medicamentos indispensables para el tratamiento de su enfermedad. En el trascurso del proceso de tutela, el accionante logró regularizar su situación en el país y acceder al régimen contributivo en salud. Fue entonces EPS Sanitas la que hizo entrega de los medicamentos solicitados inicialmente en la tutela. Ver también T-152 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

<sup>22</sup> Son casos relacionados, por lo general, con el fallecimiento del accionante. En Sentencia T-401 de 2018. M.P. José Antonio Lizarazo Ocampo, la Sala conoció una demanda para que se reconociera la pensión de invalidez. Sin embargo, en sede de revisión se constató el fallecimiento del demandante, “circunstancia que no necesariamente puede endilgarse a las actuaciones desplegadas por las entidades demandadas, y que imposibilita conceder el amparo solicitado”. Ver también T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

<sup>23</sup> En Sentencia T-200 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, la Sala evidenció que “como consecuencia del trámite de su pensión de invalidez, desaparece el interés en lo pretendido mediante la tutela relativo a que se ordene nuevamente su traslado como docente al municipio de Arjona o a uno cercano a la ciudad de Cartagena, y por ende cualquier orden emitida en este sentido por la Corte caería al vacío”. Ver también T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero.



### III. CASO CONCRETO

El caso que nos ocupa se enmarca en la presunta vulneración del derecho fundamental de petición del accionante, por parte de **la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Soacha**, respecto de la solicitud presentada el 01 de octubre de 2021 por el señor Javier Andrés Chincual García, solicitando respuesta a unos interrogantes elevados sobre el registro de un embargo y los folios de matrícula inmobiliaria de un bien inmueble.

En esta oportunidad, la judicatura pasa a verificar si la petición en cita ya fue resuelta en forma clara, completa y de fondo. Como se vio en el cuadro expuesto desde el auto de julio de 2022 (pues la entidad ORIP de Soacha no acreditó respuesta adicional a la petición posterior al auto), se observa lo siguiente del actuar de dicha oficina frente a la petición objeto de amparo constitucional:

#### **Petición de 01 de octubre de 2021**

<b><i>Solicitud</i></b>	<b><i>SI/NO respuesta</i></b>
<i>1. Certifique si para el año 2019 existía folio abierto en su oficina de Soacha del predio cuya cabidad y linderos se encuentran contenidos en la escritura No. 4147 de fecha 26 de noviembre de 2010 de la Notaria 62 de Bogotá. Lote 1 con área de 1.546.34 MT2 (Art. 11 del Decreto 1711 de julio 6/81), cuya matrícula se reporta en el certificado de tradición con No. 051-207366; en caso afirmativo deberá certificar fecha de la apertura del folio y documento u otro que lo soporte.</i>	Informa de la apertura del folio de matrícula inmobiliaria Nro. 051-207366, trasladada a la ORIP Soacha con Resolución 785 de 10 de diciembre de 2015, fecha desde la cual está activo en la oficina de Soacha.
<i>2. Indique las razones legales o fácticas que soporten, la existencia para el año 2019 de otro folio abierto del anterior predio en la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, con matricula inmobiliaria No. 50S-40561693.</i>	Se informa que la ORIP de Soacha desconocía para el año 2019 la duplicidad de folio o existencia de la matrícula 50S-40561693 abierta en la ORIP Bogotá Zona Sur.
<i>3. Al existir para el año 2019 un folio abierto del anterior predio en su oficina de Soacha, por qué no se cerró el folio de dicho predio en la Oficina de Bogotá Zona Sur.</i>	Indica que la respuesta a este punto la debe entregar el titular de la ORIP Bogotá Zona Sur.  <b>No se observa que la ORIP Soacha hubiere dado traslado al funcionario que considera competente para dar respuesta.</b>
<i>4. Si existía para el año 2019 un folio abierto del anterior predio en su oficina de Soacha, por qué la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá Zona Sur, registro el embargo de la propiedad y no remitió el mismo para ser registrado en el nuevo folio abierto en la oficina de registro de instrumentos públicos de Soacha.</i>	Indica que la explicación sobre la omisión para remitir la inscripción del embargo ordenado por el Juzgado de Cali, le corresponde al Registrador de la ORIP Bogotá Zona Sur, ya que la ORIP de Soacha desconoce dicho antecedente.  <b>No se observa que la ORIP Soacha hubiere dado traslado al funcionario que considera competente para dar respuesta.</b>
<i>5. Certifique si se ordenó la cancelación del folio de dicho predio ante la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá Zona Sur; en caso afirmativo certifique la fecha y se remitan los documentos soportes.</i>	Indica que la explicación sobre la cancelación del folio de dicho predio, le corresponde al Registrador de la ORIP Bogotá Zona Sur, ya que la ORIP de Soacha desconoce dicho antecedente.  <b>No se observa que la ORIP Soacha hubiere dado traslado al funcionario que considera</b>



	<b>competente para dar respuesta.</b>  <b>Con todo el sentido de la pregunta en este punto</b> , da cuenta de que se le está indagando a la ORIP Soacha si la misma ordenó o no la cancelación del folio de matrícula de un predio a su homólogo en Bogotá- Zona Sur, petición frente a la cual no hay respuesta sobre si sí o no, la Oficina de Soacha elevó alguna solicitud en tal sentido a la ORIP Bogotá Zona Sur.
6. <i>Certifique si conocía de la orden de embargo decretada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali (V), autoridad que profirió el oficio de embargo No. 288 del 14 de febrero de 2019 que había sido registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-42561693 registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur.</i>	Indica que en calidad de Registrador de Instrumentos Públicos de Soacha, desconocía la orden de embargo 288 de 14 de febrero de 2019 y su registro.
7. <i>Certifique si su Despacho oficio al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali (V), informando sobre la imposibilidad de efectuar el embargo sobre dicho predio.</i>	Indica que no conoce los antecedentes y por lo tanto no ha expedido oficio con destino al Juez Quinto Civil del Circuito de Cali.

Tal como se ve en el cuadro expuesto y, se sostuvo también en auto de 5 de julio de 2022, respecto a los puntos 3, 4 y 5 de la petición no se vislumbra la remisión de la ORIP de Soacha al funcionario que estimó tiene competencia para dar respuesta a tales solicitudes (ORIP Bogotá Zona Sur), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A., adicionalmente, el sentido de la pregunta número cinco de la petición, da cuenta de que se le está indagando a la ORIP Soacha si la misma ordenó o no la cancelación del folio de matrícula de un predio a su homólogo en Bogotá- Zona Sur, petición frente a la cual no hay respuesta sobre si sí o no, la Oficina de Soacha elevó alguna solicitud en tal sentido a la ORIP Bogotá Zona Sur.

Frente a lo requerido mediante auto de 5 de julio de 2022, la ORIP de Soacha emitió una última respuesta y solicitud de archivo dentro de este trámite incidental (archivo 049), manifestando que como antecedente de la petición del 01 de octubre de 2021, el Registrador de la Oficina de Registro de Bogotá- Zona Sur (Dr. Edgar Námen), remitió a la Oficina de Soacha un oficio de 19 de agosto de 2021 con radicación 50S2021EE13784, respondiendo de fondo a las inquietudes sobre migración de la matrícula 50S-40561693, así mismo que se dirigió al correo del accionante, el oficio 50S2021EE20341 de 23 de noviembre de 2021, anexándose el auto de 19 de octubre de 2021 por el cual se inició actuación administrativa tendiente a revocar la inscripción de un embargo, y que de lo anterior el registrador de la ORIP de Soacha sostuvo permanente comunicación telefónica con el registrador de la ORIP Bogotá Zona Sur, donde en cumplimiento al debido proceso, se ordenó apertura del expediente de Revocatoria No. 06 de 2021, oportunamente notificada al accionante.

Sostiene en otro aparte que el registrador de la ORIP Bogotá Zona Sur, inició actuación en razón a que fue un hecho de su oficina, del cual la ORIP-SOACHA desconocía totalmente, y que se cumplió la respuesta de fondo el 23 de noviembre de 2021 en razón a las competencias de cada uno de los funcionarios a quienes el accionante dirigió la tutela.

Visto lo anterior, observa el Despacho que los documentos a los que alude la manifestación de la ORIP Soacha, corresponden a:



- Oficio de 19 de agosto de 2021 con radicación 50S2021EE13784<sup>24</sup>, dirigido al accionante por el registrador de la ORIP de Bogotá- Zona Sur, indicándole que no es posible la expedición del certificado de tradición asociado al folio de matrícula inmobiliaria 50S-40561693, y se le efectúan precisiones sobre dicho folio.
- Oficio 50S2021EE20341 de 23 de noviembre de 2021<sup>25</sup>, dirigido al accionante por un profesional especializado de la ORIP de Bogotá- Zona Sur, donde se le informa que queda notificado electrónicamente del Auto de 19/10/2021 *“por la cual se inicia una actuación administrativa tendiente a revocar una inscripción de un folio de matrícula”*, y se indica que se anexa el auto.
- Auto de 19 de octubre de 2021<sup>26</sup>, emitido por el Dr. Edgar José Námen Ayub, Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá- Zona Sur, por medio del cual se dispuso, *“iniciar actuación administrativa tendiente a corregir y/o revocar el acto administrativo de inscripción, representado por la anotación número cinco (5) del folio de matrícula inmobiliaria 50S-40561693,...”*.

De la lectura de los contenidos de los documentos relacionados, fuerza concluirse que por cuanto el oficio de 19 de agosto de 2021, fue anterior a la petición amparada de octubre de 2021 dirigida a la ORIP de Soacha el pronunciamiento del oficio de 19 de agosto no obedeció a traslado por competencia a Bogotá, de parte de la ORIP de Soacha frente a solicitudes del accionante. Y los pronunciamientos de 19 de octubre y 23 de noviembre de 2021, obedecen a una decisión informada en oficio de 19 de agosto, de iniciar actuación administrativa, en virtud de la inscripción de un embargo en un folio de matrícula inmobiliaria, para el cual no tenía competencia la ORIP de Bogotá.

Por lo anterior, considera este Juez Constitucional, que la **ORIP de Soacha** en principio no dio cumplimiento al fallo de tutela que en segunda instancia amparó tanto el derecho fundamental de petición como el debido proceso, toda vez que no se observa de esta accionada, impulso de trámite completo a todo lo solicitado en el derecho de petición de octubre de 2021, pues de los siete puntos de la misma, hay tres de los cuales, no bastaba solo con indicar que no se tenía competencia para resolverlos, sino que la ORIP Soacha tenía la obligación legal de dar el traslado formal de que trata el artículo 21 del CPACA, a quien tenía competencia para emitir pronunciamiento de fondo, actuación que al llevarse a cabo hubiere surtido la garantía tanto del derecho fundamental de petición, como la del debido proceso administrativo:

**“ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA.** <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.”

No obstante, lo anterior, resultaría inane perseguir el cumplimiento del fallo de tutela respecto a la carga de la entidad ORIP de Soacha, en remitir a la autoridad competente los puntos 3, 4 y 5 de la petición, ya que la autoridad competente (ORIP Bogotá) ya ha emitido pronunciamientos que resuelven de fondo estos tres interrogantes del derecho de petición amparado.

<sup>24</sup> Página 5 archivo 049 expediente virtual.

<sup>25</sup> Página 13 archivo 049 expediente virtual.

<sup>26</sup> Página 15 archivo 049 expediente virtual.





Lo anterior, como se ve de la tabla que a continuación se relaciona:

**Petición de 01 de octubre de 2021<sup>27</sup>**

<b>Puntos 3, 4 y 5 de la solicitud</b>	<b>Respuestas</b>
<p>3. Al existir para el año 2019 un folio abierto del anterior predio en su oficina de Soacha, por qué no se cerró el folio de dicho predio en la Oficina de Bogotá Zona Sur.</p>	<p>Oficio D.R.B 914 de 22/06/2022 - La ORIP de Soacha Indica que la respuesta a este punto la debe entregar el titular de la ORIP Bogotá Zona Sur.</p> <p><b>No se observa que la ORIP Soacha hubiere dado traslado al funcionario que considera competente para dar respuesta.</b></p> <p>No obstante, en el Oficio de 19 de agosto de 2021, otra oficina (ORIP Bogotá) le indicó al accionante que “... por error de sistema, al momento de efectuar el traslado formal a la Orip Seccional de Soacha, no se excluyó la matrícula inmobiliaria 50S-40561693.”</p> <p>Esta respuesta remitida al accionante, resuelve de fondo el interrogante del punto 3 de la petición, de por qué no se cerró el folio de matrícula de la oficina de Bogotá.</p>
<p>4. Si existía para el año 2019 un folio abierto del anterior predio en su oficina de Soacha, por qué la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá Zona Sur, registro el embargo de la propiedad y no remitió el mismo para ser registrado en el nuevo folio abierto en la oficina de registro de instrumentos públicos de Soacha.</p>	<p>Oficio D.R.B 914 de 22/06/2022 -Indica que la explicación sobre la omisión para remitir la inscripción del embargo ordenado por el Juzgado de Cali, le corresponde al Registrador de la ORIP Bogotá Zona Sur, ya que la ORIP de Soacha desconoce dicho antecedente.</p> <p><b>No se observa que la ORIP Soacha hubiere dado traslado al funcionario que considera competente para dar respuesta.</b></p> <p>No obstante, en el Oficio de 19 de agosto de 2021, la ORIP Bogotá le indicó al accionante que “...no se excluyó la matrícula inmobiliaria 50S-40561693. sino hasta el año 2019, con ocasión de la petición presentada a esta Oficina con el radicado 50S2019ER06730 del 29 de marzo de 2019, fecha en la cual y pese a no tener competencia para ello, ya se habla inscrito como anotación No. 5, el oficio No. 288 del 14 de febrero de 2019 proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali, Valle, dentro del proceso No. 76001-31- 03-005-2019-00023-00, por el cual se ordena el embargo del predio, radicado con el turno de documento 2019-9662 del 25 de febrero de 2019...”</p> <p>Esta respuesta remitida al accionante por la ORIP de Bogotá, resuelve de fondo el interrogante del punto 4 de porqué la Oficina de Bogotá registró el embargo de la propiedad y no remitió el embargo para ser registrado en la oficina de Soacha, pues describe las circunstancias en las que se efectuó el registro del embargo reconociendo la falta de competencia para ello, respuesta que se observa es armónica con la respuesta al punto anterior de que, por error del sistema no se había excluido de la oficina de Bogotá el folio de matrícula 50S-</p>

<sup>27</sup> Página 18 a 22, archivo 01 expediente virtual.



	40561693.
5. Certifique si se ordenó la cancelación del folio de dicho predio ante la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá Zona Sur; en caso afirmativo certifique la fecha y se remitan los documentos soportes.	<p>Oficio D.R.B 914 de 22/06/2022 -Indica que la explicación sobre la cancelación del folio de dicho predio, le corresponde al Registrador de la ORIP Bogotá Zona Sur, ya que la ORIP de Soacha desconoce dicho antecedente.</p> <p><b>No se observa que la ORIP Soacha hubiere dado traslado al funcionario que considera competente para dar respuesta, ni que responda a la pregunta acerca de, si la ORIP de Soacha ordenó o no la cancelación del folio de matrícula de un predio a su homólogo en Bogotá-Zona Sur, o si sí o no, elevó alguna solicitud en tal sentido a la ORIP Bogotá Zona Sur.</b></p> <p>No obstante, en el Oficio de 19 de agosto de 2021, la ORIP Bogotá le indicó al accionante que no se podía expedir certificado de tradición asociado al folio de matrícula 50S-40561693, “...ya que dicho predio fue trasladado por competencia territorial a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos seccional de Soacha, mediante Resolución No. 785 del 10 de diciembre de 2015....”, y anexa copia de dicha resolución en cuyo aparte resolutivo se observa (ver anexos dentro del archivo 049), la ORIP Bogotá Zona Sur ordenó el traslado físico y magnético de 225 matrículas inmobiliarias, entre ellas la Nro. 40561693, y ordenó la exclusión de la base de datos de esa y las otras matrículas relacionadas, de la base de datos de la ORIP Bogotá Zona Sur</p> <p>Esta respuesta y su copia de resolución anexa, remitidas al accionante, resuelven de fondo el interrogante del punto 5 sobre si se ordenó la cancelación del folio del predio ante la ORIP de Bogotá, como quiera que el oficio de 19 de agosto de 2021 y su anexo aclaran, que en efecto existió acto administrativo que había ordenado la exclusión de la matrícula 50S-40561693, de la oficina de Bogotá, y había dispuesto su traslado a la ORIP de Soacha.</p>

De todo lo expuesto fácticamente y jurisprudencialmente, concluye esta Agencia Judicial que no hay lugar a apertura de trámite incidental por carencia de objeto, tanto por hecho superado en cuanto a los puntos 1, 2, 6 y 7 de la petición amparada que ya fueron resueltos de fondo por la ORIP de Soacha, como por las situaciones que sobrevienen frente a los puntos 3, 4 y 5 del derecho de petición, en razón a que persona distinta al accionante y a la entidad contra quien se dirigió la orden del fallo de tutela, ya había logrado que la pretensión de respuesta de fondo a los interrogantes de los puntos 3, 4 y 5 de la petición, se satisfaga en lo fundamental.

Lo anterior, como quiera que si bien la accionada Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha no dio respuesta de fondo ni tampoco se evidencia que hubiera adelantado el traslado formal por competencia (artículo 21 CPACA) a la autoridad competente de los puntos 3, 4 y 5 del derecho de petición amparado por el fallo de tutela, no es menos cierto que esas tres solicitudes de información ya tienen respuesta de la entidad que si es competente para darla – Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá- Zona Sur- como se evidencio del cuadro anterior, mediante Oficio



de 19 de agosto de 2021, así como de la puesta en conocimiento al accionante, del contenido de la Resolución Nros. 785 de 10 de diciembre de 2015 y del Auto de 19 de octubre de 2021.

Por lo expuesto, no se dará apertura al trámite incidental, por carencia de objeto. El presente auto deberá ser comunicado por el medio más expedito a las partes atendiendo que contra el mismo no procede recurso alguno como bien lo ha señalado la jurisprudencia, pues en materia de incidentes de desacato solo procede la consulta ante el superior jerárquico en los casos de imponerse sanción; sin embargo, como quiera que en el presente asunto no se sanciona, se entiende que no procede recurso alguno con la decisión.

La correcta interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexecuibilidad, no puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta (...)<sup>28</sup>

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

### RESUELVE

- 1.- **ABSTENERSE** de iniciar el trámite incidental.
- 2.- **COMUNÍQUESE** la presente decisión a las partes.
- 3.- Una vez sea devuelto el trámite de tutela de la Corte Constitucional, excluido de revisión, se procederá a efectuar el archivo del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

**AUGUSTO LLANOS RUIZ**  
**JUEZ**

A.O.-

---

<sup>28</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 243 de treinta (30) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996). Mg. Ponente. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Firmado Por:  
Augusto Llanos Ruiz  
Juez Circuito  
Juzgado Administrativo  
010  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 31660e7e525ed2b735ffe06d0b0f3cee4ffa2a781636f534b9333f2fa43e071

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>